

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/115  
25 de mayo de 1999

(99-2094)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre  
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

## **COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS**

Se ha recibido de la Comunidad Europea y sus Estados miembros la siguiente comunicación, de fecha 12 de abril de 1999, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.

La pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional,  
transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto  
a la política de competencia y viceversa

Esta comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros se centrará en el primer elemento del programa de trabajo del Grupo: "La pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida con respecto a la política de competencia y viceversa". A ese respecto hay dos cuestiones pertinentes: a) ¿cómo pueden aplicarse los principios de la OMC de transparencia y no discriminación -incluidos el trato de NMF y el trato nacional- a la legislación y a la política sobre competencia?; b) ¿cómo pueden contribuir la legislación y la política sobre competencia a las relaciones comerciales internacionales transparentes y no discriminatorias? Esa segunda cuestión está estrechamente relacionada con un tercer punto del programa de trabajo de la OMC, en el que se requiere el examen de la "contribución de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio internacional". Por lo tanto no constituirá el aspecto principal de esta comunicación. Sin embargo, en la sección 3 analizamos brevemente cómo pueden afectar negativamente las prácticas anticompetitivas a la igualdad de las oportunidades de competencia de las compañías extranjeras, con ejemplos adicionales de prácticas discriminatorias. (Esto viene a complementar las ideas expuestas en nuestra comunicación del 5 de marzo de 1998 -WT/WGTCP/W/62- y se desarrollará aún más en nuestra comunicación sobre el punto 3 del programa de trabajo.)

Esta comunicación se centra principalmente en la cuestión de la aplicación de los principios de transparencia y no discriminación de la OMC a la legislación y la política en materia de competencia. Tras una breve exposición de la función de esos principios en el sistema de la OMC (sección 1), se considerará la relación entre los principios de transparencia y no discriminación y los principales elementos de la legislación y la política sobre competencia, en la medida en que puedan afectar al comercio internacional. En la última sección se presentan ideas preliminares sobre las posibilidades de establecer en la OMC una serie de principios fundamentales sobre la legislación en materia de competencia y su aplicación.

Estas comunicaciones deben leerse junto con otras transmitidas anteriormente al Grupo de Trabajo de la OMC, y con las que se presentarán dentro de los puntos 2 y 3 de nuestro programa de trabajo. La Comunidad Europea y sus Estados miembros han expuesto a ellas el caso de la elaboración de un marco multilateral de normas sobre competencia en la OMC. Entre los elementos que habrán de considerarse en ese marco pueden figurar: a) principios fundamentales y normas comunes relativos a la adopción de un marco de legislación sobre competencia y su aplicación; b) planteamientos comunes a las prácticas anticompetitivas que repercuten considerablemente en el comercio y la inversión internacionales; y c) disposiciones sobre cooperación internacional. La

contribución sobre el punto 2 de nuestro programa de trabajo se centrará esencialmente en la cuestión de la cooperación. En la relativa al punto 3 se tratará de agrupar las cuestiones esenciales derivadas de los tres elementos anteriores, a fin de considerar cómo puede contribuir la política de competencia a lograr los objetivos de la OMC. La Comunidad Europea y sus Estados miembros están firmemente convencidos de que la dimensión de desarrollo debe formar parte integrante de un marco multilateral de normas de competencia en la OMC, y de que los intereses de los países en desarrollo se deben tener en cuenta en los diferentes elementos de ese marco multilateral.

## **I. LOS PRINCIPIOS DE LA OMC DE NO DISCRIMINACIÓN Y TRANSPARENCIA**

Al considerar la aplicación de los principios de no discriminación y transparencia con respecto a la legislación y a la política sobre competencia, esta contribución se centrará en los fines perseguidos por esos principios en el sistema de la OMC, y no en la cuestión más limitada del grado en que pueden ser aplicables ciertas disposiciones de la OMC -como el párrafo 4 del artículo III o el artículo X-, hasta cierto punto, a las leyes sobre competencia de los Miembros de la OMC. Ese amplio planteamiento basado en los principios, más bien que en la aplicación de disposiciones concretas, permite considerar las dos cuestiones relativas a la aplicación real de la legislación sobre competencia, así como las relativas a la falta de una ley o aquellas en que la ley no se aplica efectivamente (por ejemplo, debido a exclusiones o a debilidades en el proceso de aplicación).

La no discriminación -incluidos el trato de NMF y el trato nacional- es la piedra angular del sistema comercial multilateral. No sólo se refleja en una disposición básica del GATT, sino en los diferentes Acuerdos de la OMC. Varios Grupos Especiales del GATT y de la OMC han destacado que la finalidad del principio de no discriminación es evitar medidas que alteren la igualdad efectiva de las oportunidades de competencia entre productos nacionales o extranjeros, o entre productos originarios de distintos Miembros de la OMC. Esto se aplica generalmente tanto a la discriminación *de jure* como a la discriminación *de facto*. La relación entre el principio de no discriminación y las condiciones de competencia tal vez se exponga más claramente en la definición del AGCS de trato nacional, en la que se indica que "se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o proveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedores de servicios similares de otro Miembro".

Por lo tanto, como puede verse, existe una estrecha relación entre el principio de la OMC de no discriminación y los objetivos básicos de la legislación sobre competencia. En efecto, es esencial un régimen efectivo de legislación sobre competencia para combatir las prácticas anticompetitivas que niegan efectivamente a los productores extranjeros la igualdad de oportunidades de competencia, debilitando así los compromisos de apertura al mercado de la OMC. Del mismo modo, mediante la legislación nacional sobre competencia se puede lograr que las compañías extranjeras no actúen en forma anticompetitiva cuando operan en el mercado. Al examinar las relaciones entre el principio de la OMC de no discriminación y la legislación y política sobre competencia, surgen tres conjuntos de cuestiones que deben considerarse: a) si existen disposiciones en el régimen jurídico sobre competencia de los Miembros de la OMC, incluidos la legislación sustantiva y los procedimientos, que supongan una discriminación formal con respecto a las empresas extranjeras; b) si el régimen jurídico sobre competencia de un Miembro de la OMC dispone efectivamente de medios para abordar las prácticas anticompetitivas que niegan a los productos importados (o a las compañías extranjeras establecidas en el mercado) una igualdad efectiva de oportunidades de competencia; y c) si en la práctica y en la aplicación de la legislación sobre competencia pueden darse situaciones en que se aplique de hecho un trato menos favorable a casos en que interviene intereses extranjeros con respecto a casos similares en que intervienen esencialmente intereses nacionales.

Otro principio fundamental del sistema de la OMC es la transparencia. Las disposiciones básicas sobre transparencia figuran en el artículo X del GATT y en el artículo III del AGCS, en las que se estipula la publicación de una amplia serie de medidas de aplicación general que afectan al

funcionamiento de los acuerdos y, en el caso del GATT, disposiciones básicas sobre la administración de esas medidas de manera uniforme, imparcial y equitativa, así como procedimientos para el examen administrativo o judicial de acciones relativas a cuestiones aduaneras. (El Grupo Especial Kodak-Fuji ha interpretado el artículo X en el sentido de que también abarca las disposiciones administrativas en casos individuales cuando esas disposiciones establecen o revisan principios o criterios aplicables en casos futuros.) Sin embargo, la transparencia es, como principio, mucho más amplia que las disposiciones del artículo X del GATT o del artículo III del AGCS. En cada uno de los Acuerdos de la OMC abarcados se han establecido disposiciones específicas sobre transparencia, con el fin de garantizar que el principio se aplica debidamente a diferentes tipos de medidas oficiales que repercuten en el comercio. Tales disposiciones son muy variadas y dependen del contexto particular de cada acuerdo. Sin embargo, merecen especial mención dos tipos de disposiciones sobre transparencia: a) en el caso de los Acuerdos de la OMC relativos a medidas comerciales de reparación (es decir, antidumping, subvenciones, salvaguardias), existen disposiciones sobre transparencia detalladas en relación con los derechos de todas las partes interesadas en las actuaciones que puedan conducir a la adopción de medidas comerciales, así como con la necesidad de motivar plenamente las decisiones adoptadas en los distintos casos; y b) en el Acuerdo sobre los ADPIC existen disposiciones relativas a los procedimientos de aplicación de que se debe disponer en virtud de la legislación de un Miembro. Tales disposiciones conciernen tanto a la transparencia *stricto sensu* como a la garantía de una aplicación efectiva de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.

Al examinar la pertinencia del principio de transparencia para la legislación y la política sobre competencia, deben revestir particular importancia tres series de cuestiones: a) la transparencia en cuanto a las disposiciones generales de la legislación, y los criterios utilizados para aplicarlas; b) la transparencia en el proceso de aplicación de la legislación sobre competencia, incluidos los procedimientos administrativos y judiciales; y c) los derechos de las compañías en los procedimientos sobre competencia. Desde un punto de vista multilateral, la transparencia tiene, naturalmente, otra dimensión fundamental, que comprende procedimientos para la notificación y la consulta entre Miembros de la OMC, el establecimiento de "servicios de información" y procedimientos para la vigilancia y el examen multilateral. Este aspecto de la transparencia se considerará en nuestra comunicación sobre cooperación internacional, por lo que no se analizará más a fondo aquí.

## **II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA LEGISLACIÓN Y LA POLÍTICA SOBRE COMPETENCIA Y SU RELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA Y LA NO DISCRIMINACIÓN**

El Grupo se ha beneficiado de un intercambio de experiencias con respecto a los regímenes jurídicos sobre competencia aplicados por diferentes Miembros de la OMC. Ese intercambio de experiencias ha mostrado que existe una variedad de experiencias nacionales, derivadas de los distintos contextos legales e institucionales, así como diferencias en los niveles de desarrollo. Al mismo tiempo, hay importantes elementos comunes. En cada régimen jurídico sobre competencia se ha tratado de garantizar que los principios de no discriminación y transparencia se recogen debidamente no sólo en el marco jurídico fundamental, sino también en los procedimientos para la administración y aplicación de la ley, y mediante una activa política de información pública.

La principal preocupación en la OMC es que un régimen jurídico nacional sobre competencia disponga de los medios necesarios para abordar las prácticas anticompetitivas que repercuten considerablemente en los intereses de otros Estados Miembros, y en particular, las que cierran el acceso a un mercado y niegan así la igualdad efectiva de oportunidades de competencia. Además, debe haber procedimientos eficaces para administrar y aplicar la ley. La discriminación no declarada, por el criterio de la nacionalidad, es contraria a la propia razón de ser de la legislación sobre competencia, por lo que apenas hay casos en que esa discriminación se refleje en las leyes de los Miembros de la OMC. Por otro lado, pueden surgir cuestiones como las relativas a la aplicación real

de la legislación sobre competencia cuando se trata de materias que afectan a la relación competitiva de productos importados y nacionales (o a la competencia entre compañías nacionales y extranjeras). Una legislación general sobre competencia, respaldada por una estructura de aplicación efectiva y transparente, es la mejor garantía contra el riesgo de esa discriminación. En efecto, un marco transparente de legislación sobre competencia y un proceso de aplicación contribuyen considerablemente a disipar las preocupaciones por las consecuencias sobre el acceso al mercado de prácticas anticompetitivas. La transparencia tiene además varias ventajas adicionales: a) las normas sobre competencia son complejas y las empresas tienen que estar en situación de evaluar, con un grado de incertidumbre razonable, las prácticas y decisiones prohibidas; b) la transparencia es esencial para que las compañías estén en situación de tratar de hallar reparación contra prácticas anticompetitivas ante las autoridades encargadas de la competencia o ante los tribunales. Del mismo modo, los consumidores necesitan saber cómo pueden contribuir las normas sobre competencia a proteger sus derechos; c) las garantías de "proceso legal" en la aplicación de la legislación sobre competencia son importantes por razones de equidad y para reducir costos innecesarios a las empresas. A medida que más países adopten un régimen jurídico sobre competencia habrá más razones para tener la seguridad de que los diferentes regímenes nacionales se basan en elevadas normas de transparencia; d) la defensa de la competencia es una dimensión esencial de la transparencia. Las autoridades encargadas de la competencia deben estimular a otros departamentos de gobierno a tomar en consideración las preocupaciones que suscita la competencia, por ejemplo en la adopción de medidas o disposiciones comerciales.

Con el fin de tener más en cuenta la pertinencia de los principios de transparencia y no discriminación, en esta sección se considerará cómo pueden aplicarse estos principios en relación con diferentes aspectos de una estructura nacional de la legislación sobre competencia. Se tratará sobre todo de aquellos elementos esenciales de la legislación y la política en materia de competencia que revisten interés para el sistema comercial multilateral. Con el fin de ilustrar cómo en esa legislación y en esa política se ha tratado de abordar cuestiones relativas a la no discriminación y a la transparencia, se hace referencia en ciertos casos a experiencias en la legislación sobre competencia de la Comunidad Europea o la legislación de sus Estados miembros.<sup>1</sup> Esto no quiere decir, sin embargo, que los planteamientos seguidos en la Comunidad Europea sean los únicos posibles. Se debe perseguir más bien la finalidad de tratar de definir principios comunes, basados en elevadas normas de transparencia y no discriminación. En la última sección de esta comunicación se examinan las posibilidades de esos principios comunes.

#### A. ALCANCE Y COBERTURA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA

##### 1. Adopción de una legislación general sobre la competencia

La legislación general sobre la competencia es un instrumento primordial para abordar las prácticas anticompetitivas que nieguen la igualdad efectiva de oportunidades de competencia y cierren el acceso a un mercado. Los debates en el Grupo han mostrado que, si bien varían el alcance sustantivo de los regímenes jurídicos nacionales sobre competencia, la mayoría de las leyes relativas a ésta comprenden disposiciones sobre acuerdos anticompetitivos entre compañías y sobre la monopolización o el abuso de una posición dominante. Las prácticas anticompetitivas con efectos de exclusión pueden surgir como resultado de acuerdos horizontales o verticales entre compañías o de ciertos tipos de conducta de una compañía con posición de poder en el mercado. Tales prácticas pueden realizarlas compañías extranjeras o nacionales y empresas públicas o privadas. Por lo tanto, en todo método basado en la no discriminación se debe tratar de garantizar la existencia de un régimen jurídico nacional sobre la competencia dotado efectivamente de medios para afrontar esas

---

<sup>1</sup> En el documento WT/WGTCP/W/34 figura un análisis general de las leyes sobre competencia de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros.

prácticas y que la legislación se aplica realmente en forma no discriminatoria con independencia de que resulten afectados intereses extranjeros o nacionales. La adopción de un régimen jurídico general sobre la competencia no excluye la determinación de prioridades en la aplicación, lo que permite a una autoridad encargada de la competencia centrar los limitados recursos en aquellas prácticas que tengan mayores efectos sobre la estructura de la competencia en un mercado. En efecto, la determinación de prioridades es con frecuencia necesaria para impulsar las operaciones de aplicación de la autoridad encargada de la competencia. Esto puede revestir particular importancia para las autoridades encargadas de la competencia establecidas recientemente en países en desarrollo.

Una cuestión que ha sido objeto de mucho debate en el Grupo de Trabajo es el grado en que las disposiciones sobre el control de las fusiones son un elemento necesario de un régimen general de la legislación sobre competencia. Desde la mera perspectiva de la legislación sobre competencia, hay razones poderosas para elaborar procedimientos con el fin de controlar las fusiones que establezcan o refuercen una estructura del mercado anticompetitiva antes de entrar en vigor. No obstante, puede que, debido a la interacción entre política comercial y de competencia, no debe prevalecer la preocupación de si los países deciden o no introducir un régimen de control de las fusiones. Normalmente se pueden abordar las prácticas que dan lugar al cierre de un mercado, si bien con menor eficacia, en virtud de la legislación relativa al abuso de dominio o monopolización. Lo que en todo caso sería pertinente para el sistema de comercialización es que cuando existan procedimientos de control de las fusiones se conformen a los principios de transparencia y no discriminación, y que se prevean procedimientos de cooperación en relación con fusiones multijurisdiccionales.

La transparencia es una preocupación esencial de las autoridades encargadas de la competencia. En la mayoría de las leyes sobre competencia se prohíben ciertos tipos de conducta, definidos en términos muy generales. La publicación del marco legal y reglamentario básico es por supuesto esencial, pero difícilmente condición suficiente para garantizar a empresas y consumidores una certidumbre jurídica. Por ejemplo, según el régimen jurídico de la Comunidad Europea sobre competencia se han introducido varias medidas adicionales para garantizar la transparencia, entre las que figuran: a) la publicación de comunicaciones o directrices relativas a los criterios utilizados por las autoridades encargadas de la competencia para interpretar o aplicar determinados aspectos de la legislación sobre competencia; b) publicaciones de carácter general relativas a la legislación de la Comunidad Europea sobre competencia; c) un informe anual con observaciones sobre la evolución legislativa y la aplicación en distintos casos; d) un boletín regular sobre la política de competencia europea, publicado tres veces al año. La información figura asimismo en Europa en el servidor de la World Wide Web de la Unión Europea.<sup>2</sup> Los Estados miembros de la Comunidad Europea han tomado medidas análogas con respecto a la legislación nacional sobre competencia. Si bien para garantizar la transparencia se pueden seguir diferentes métodos, es bastante importante que en cada uno de ellos exista suficiente información no sólo sobre el régimen jurídico básico, sino también sobre cómo se aplica la ley en la práctica.

## **2. Exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia**

La legislación sobre competencia debe aplicarse, en principio, a todos los sectores de la economía, y las exclusiones deben reducirse al mínimo. El Grupo ha mantenido ya un debate inicial sobre la cuestión de las exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia. En

---

<sup>2</sup> [Http://europa.eu.int](http://europa.eu.int). Las páginas de la DG IV contienen información sobre los principales aspectos de la política de competencia, a saber, antimonopolio, fusiones, liberalización, ayudas estatales y aspectos internacionales. Bajo cada uno de esos títulos, el usuario puede hallar secciones con comunicados de prensa, leyes publicadas en el boletín oficial, textos completos de disposiciones legislativas y una lista de decisiones de la Comisión y dictámenes de la Corte Europea de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. También figura otra información sobre legislación y política de competencia, así como enlaces con sitios en la Web de otras autoridades encargadas de la competencia.

numerosos regímenes jurídicos relativos a la competencia se excluye total o parcialmente de la aplicación de la legislación en materia de competencia a determinados sectores económicos. En otros casos, la legislación sobre competencia no se aplica debido a regímenes nacionales de reglamentación. Las amplias exclusiones sectoriales de la aplicación de la legislación sobre competencia son motivo de preocupación, tanto por lo que respecta a la discriminación como a la transparencia. La falta de disciplinas efectivas en la legislación sobre competencia en un sector de actividad económica puede dar lugar a prácticas anticompetitivas de compañías nacionales, que impidan el acceso a un mercado a competidores extranjeros. También es importante establecer claramente el alcance y los criterios de cualesquiera de esas exclusiones cuando se aplica la exclusión sectorial, o cuando la reglamentación estatal afecta a la aplicación de la legislación sobre competencia. A este respecto, procede señalar que, como ya se ha mencionado en el Grupo de Trabajo, en la mayoría de los regímenes jurídicos sobre competencia hay una clara tendencia a eliminar las exclusiones existentes de la aplicación de la legislación sobre competencia o a definir las exclusiones que subsistan en términos restrictivos. Todo ello sin perjuicio de que determinados tipos de exclusiones horizontales puedan tener razones de desarrollo y difícilmente repercutan en el comercio internacional. Por ejemplo, una de las condiciones de la aplicación del artículo 85 del Tratado de la CE es que el acuerdo ha de tener un efecto "apreciable" sobre la competencia y sobre el comercio entre Estados miembros, condición que la mayoría de las veces no se cumple en casos de acuerdos entre pequeñas y medianas empresas.

La relación entre la legislación sobre competencia y la reglamentación gubernamental se ha examinado detenidamente en el Grupo de Trabajo. Según la mayoría de los regímenes jurídicos sobre competencia, la reglamentación gubernamental propiamente dicha no está comprendida en el ámbito de aplicación de la legislación sobre competencia. Debido a sus objetivos de integración del mercado, la situación es diferente en virtud de la legislación sobre competencia de la CE, que en determinadas condiciones abarca medidas aplicadas por los Estados miembros. Esto no quiero decir, empero, que pueda aplicarse un marco similar en el plano multilateral. Pero es esencial que la legislación sobre competencia se aplique, en pie de igualdad, a las empresas privadas y a las empresas públicas. También sería importante aclarar que la intervención de los poderes públicos no justifica la concesión a las empresas de amplias exenciones de las disciplinas de la legislación sobre competencia.

Los cárteles de exportación no están incluidos en la aplicación de la mayoría de los regímenes jurídicos sobre competencia. En algunos casos, esto puede deberse a una exclusión total; en otros, la legislación sobre competencia no sería aplicable en virtud de principios generales de jurisdicción, siempre y cuando el cártel no tenga repercusiones en el mercado del país exportador. Algunos cárteles de exportación pueden considerarse una forma de política de "empobrecer al vecino", cuyos resultados son condiciones discriminatorias entre los mercados nacionales y de exportación. Por lo tanto, hay razones para examinar la pertinencia del principio de no discriminación para el trato de cárteles de exportación, teniendo en cuenta al mismo tiempo que -por razones jurisdiccionales- la aplicación de la ley sobre competencia del país exportador no es necesariamente la solución apropiada en todos los casos. La cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia puede desempeñar una importante función a este respecto y contribuir a la efectiva aplicación de la legislación sobre competencia.

## B. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA

La eficacia de la legislación sobre competencia para hacer frente a las prácticas anticompetitivas, incluidas las que niegan a compañías extranjeras la igualdad efectiva de oportunidades de competencia, obstaculiza considerablemente el grado real de la aplicación. Los procedimientos de aplicación varían según los sistemas jurídicos sobre cuestiones como el equilibrio entre aplicación pública y privada, las facultades de las autoridades encargadas de la competencia o la naturaleza y el nivel de las sanciones. Lo indispensable para una aplicación efectiva es la combinación de una activa política de aplicación por las autoridades encargadas de la competencia y la aplicación mediante actuaciones privadas en los tribunales nacionales. El establecimiento de una estructura de aplicación efectiva es una ardua tarea para todos los países, y sólo puede lograrse en

forma progresiva. Es evidente que las dificultades particulares de los países en desarrollo a este respecto merecen especial reconocimiento y un apoyo concreto. En esta sección se considerará cómo pueden aplicarse los principios de transparencia y no discriminación en las diferentes fases de la aplicación de la legislación sobre competencia, incluidas las garantías para lograr una administración razonable, objetiva e imparcial. Debido a su especial importancia, en la siguiente sección se tratan las cuestiones relativas a los derechos de las compañías en los procedimientos de competencia.

## **1. Aplicación por las autoridades encargadas de la competencia**

Con el fin de lograr la efectiva aplicación de la legislación sobre competencia, se ha considerado necesario crear en los diferentes regímenes jurídicos sobre competencia una autoridad con facultades suficientes para realizar investigaciones de prácticas anticompetitivas, incluido el examen de quejas por las compañías afectadas. Esa autoridad debe disponer de los medios indispensables para obtener información y estar debidamente dotada para realizar los complejos análisis económicos, jurídicos y fácticos primordiales que permitan determinar si se viola la legislación sobre competencia. Por ejemplo, en el régimen jurídico de la CE sobre competencia, la Comisión está facultada para obtener toda la información necesaria de las compañías de que se trate, de terceras partes y de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la competencia. El procedimiento real de investigación tiene diversas fases, incluida la decisión de abrir una investigación, determinar hechos, proceder a un acto formal mediante el cual se notifican a las empresas las objeciones sobre supuestas prácticas anticompetitivas, y en el que se exponen las razones fácticas y jurídicas, audiencias con la participación de todas las partes interesadas, y la adopción de una decisión razonada, que puede impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia Europeo.

Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea ha creado una autoridad nacional encargada de aplicar la ley sobre competencia. Los Estados miembros pueden asimismo aplicar, en determinadas condiciones, los artículos 85 y 86 del Tratado de la CE. Es interesante señalar que, en algunos Estados miembros, las autoridades encargadas de la competencia tienen facultades de investigación más amplias que las de la Comisión, en particular, por lo que se refiere a la disponibilidad de facultades de policía para obtener información y la imposición de sanciones en caso de no cooperar. Según los distintos regímenes administrativos, en el procedimiento de investigación se pueden prever diferentes modalidades. Lo importante es que, sea cual fuere el régimen, haya suficientes garantías tanto de la eficacia como de la transparencia de los procedimientos. Al mismo tiempo, es esencial que existan garantías para proteger la información confidencial. En la Comunidad, el derecho a la confidencialidad se garantiza por el artículo 214 del Tratado de Roma. En este artículo se declara que los funcionarios y agentes de la Comunidad estarán obligados a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas, y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes. La legislación nacional de los Estados miembros de la Unión Europea contiene asimismo disposiciones sobre la protección de la información confidencial.

Una dimensión esencial de la transparencia es la necesidad de justificar totalmente las decisiones relativas a la aplicación de la legislación sobre competencia. Esa legislación se basa esencialmente en casos concretos, incluidas las decisiones de las autoridades encargadas de la competencia y los dictámenes de los tribunales. La motivación de las decisiones sobre competencia es, pues, importante, no sólo para las partes directamente afectadas por determinado caso, sino también por razones de certidumbre jurídica general y para aclarar criterios de observancia que puedan aplicarse en futuros casos.

## **2. Aplicación por los tribunales**

El poder judicial tiene una función primordial en la aplicación de la legislación sobre competencia. Esta aplicación por el poder judicial puede ayudar también a reducir excesivos costos administrativos y a facilitar la determinación de prioridades por las autoridades encargadas de la

competencia. En términos generales, la aplicación judicial puede revestir tres modalidades diferentes: a) actuación directa de las partes privadas ante los tribunales nacionales, lo cual puede comprender conflictos relacionados con la aplicación de un contrato, peticiones de daños y perjuicios, etc.; b) actuaciones para la aplicación ante tribunales nacionales (o tribunales especiales) iniciada por las autoridades encargadas de la competencia; c) examen judicial de las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la competencia.

Según la legislación de la CE sobre competencia, las instituciones de la Comunidad y los tribunales de los Estados miembros desempeñan una función complementaria. El Tratado de Roma concede a la Comisión Europea una función de dirección para la aplicación de las normas de la CE sobre competencia. Al mismo tiempo, las autoridades nacionales encargadas de la competencia están facultadas, en la mayoría de los casos, para aplicar la legislación de la CE sobre competencia. Contra las decisiones de la Comisión se puede recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia. También se puede apelar contra los dictámenes del Tribunal ante la Corte Europea de Justicia sobre cuestiones de derecho. El principio del efecto directo de la legislación de la Comunidad implica que los tribunales de los Estados miembros están facultados también para aplicar las normas de la CE sobre competencia. En general, dichos tribunales pueden dictar requerimientos, o declarar la nulidad de los acuerdos controvertidos o adoptar medidas provisionales. Las empresas que demandan ante los tribunales nacionales por infracción de la legislación comunitaria sobre la competencia pueden recurrir a todos los procedimientos y medios de reparación previstos en la legislación nacional. Los medios de reparación y las normas de procedimientos aplicadas por los tribunales nacionales por infracción de la legislación de la CE sobre competencia no pueden ser menos favorables que las establecidas para infracciones comparables de la legislación nacional.

Lo mismo que en el caso de los procedimientos de aplicación ante las autoridades encargadas de la competencia, la función de aplicación del poder judicial varía según los diferentes sistemas jurídicos. Sin embargo, es importante que se reconozcan medios efectivos para tratar de obtener reparación por medio de los tribunales nacionales por las infracciones de la legislación sobre competencia, si bien las modalidades particulares dependerán del equilibrio entre la aplicación privada y pública.

### **3. Recursos contra las violaciones de la legislación sobre competencia**

Se puede disponer de diferentes tipos de recursos contra las violaciones de la legislación sobre competencia, que comprenden requerimientos judiciales, órdenes de cesar y desistir, sanciones administrativas o multas, sanciones penales, nulidad de contratos, indemnización de daños y perjuicios, etc. Cualesquiera que fueren los recursos particulares según los diferentes regímenes jurídicos sobre competencia, la credibilidad de un sistema de aplicación dependerá de la disponibilidad de sanciones a un nivel suficientemente riguroso para que tenga efectos disuasorios.

#### **C. DERECHOS DE PARTES PRIVADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA**

Los derechos de partes privadas en los procedimientos relacionados con la competencia son esenciales para la aplicación de los principios de transparencia y no discriminación. La mejor garantía para una aplicación transparente y no discriminatoria de la legislación sobre competencia es reconocer a todas las compañías, ya sean nacionales o extranjeras, medios efectivos para tratar de obtener reparación contra prácticas anticompetitivas en virtud de la legislación nacional sobre competencia. De ahí la importancia del derecho a presentar reclamaciones ante las autoridades encargadas de la competencia y del derecho a demandar en los tribunales.

En un estudio de la OCDE sobre los derechos de las compañías extranjeras en virtud de las leyes sobre competencia se llegó a la conclusión de que las compañías extranjeras no están sometidas en general a trato diferenciado en virtud de las leyes sobre competencia. Al mismo tiempo, en el



estudio se mostraba que existen importantes diferencias según los países en el tipo de sistemas utilizados para aplicar la legislación sobre competencia, y que esas diferencias afectan a los derechos de toda compañía a formular una petición a la autoridad encargada de la competencia o a plantear una demanda privada.

A ese respecto, es apropiado analizar, a título de ejemplo, cómo se ha abordado esta cuestión en virtud de la legislación de la CE sobre competencia. Toda compañía, ya sea nacional o extranjera, puede presentar una reclamación ante la Comisión. Para ello se puede utilizar un formulario normalizado. La Comisión acusa recibo de la reclamación e informa luego al demandante de las medidas adoptadas como consecuencia de ella, incluida información sobre las medidas tomadas con respecto a las empresas objeto de la reclamación o de otras reclamaciones presentadas sobre los mismos hechos. La Comisión está obligada a examinar detenidamente los elementos fácticos y jurídicos que le someta el demandante. De conformidad con un dictamen de 1992 del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión puede rechazar una reclamación por entender que no están en juego intereses importantes de la Comunidad, y que el asunto puede resolverse satisfactoriamente en los tribunales nacionales. Cuando, después de recibir una reclamación, la Comisión considera que, sobre la base de la información de que dispone, no hay motivos suficientes para iniciar una investigación, ha de informar al demandante de sus razones, y fijar un plazo para que presente nuevas observaciones por escrito. El demandante tiene también derecho a recibir una decisión definitiva de la Comisión sobre la reclamación, decisión que puede impugnarse en una acción de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia. Como ya se ha señalado, las compañías tienen también derecho a invocar la legislación sobre competencia en las actuaciones ante los tribunales nacionales.

La otra dimensión importante relacionada con los derechos de las compañías se refiere a las "garantías de proceso legal" en los procedimientos de aplicación ante las autoridades encargadas de la competencia. Una vez más, procede mencionar brevemente los derechos fundamentales reconocidos a las compañías en virtud de la legislación de la CE sobre competencia. En resumen, esos derechos comprenden: a) notificación a todas las partes interesadas de una "formulación de objeciones", en la que se indiquen en forma pormenorizada las objeciones contra la práctica de que se trate; b) el derecho a responder por escrito o verbalmente a las objeciones suscitadas por la Comisión. Las invitaciones a una audiencia no se limitan a las partes a las que se haya dirigido una objeción, sino que se envían también a otros terceros interesados, como demandantes; c) el derecho a acceder al expediente, con excepción de los documentos de carácter confidencial; d) el derecho a la protección de la información confidencial; e) el derecho al examen judicial de decisiones sobre competencia.

Como ya se ha señalado, en varios Acuerdos de la OMC se han establecido disposiciones concretas sobre los derechos de las partes privadas en relación con procedimientos administrativos o judiciales. Con el fin de fomentar una aplicación de la legislación sobre competencia efectiva, transparente y no discriminatoria, hay razones poderosas para examinar principios comunes relativos a los derechos de las compañías en virtud de la legislación sobre competencia. La finalidad no debe ser un sistema de aplicación armonizado, por existir importantes y apreciables diferencias entre regímenes jurídicos nacionales sobre competencia y sistemas judiciales. Se debe tratar más bien de considerar qué principios fundamentales se deben garantizar, teniendo en cuenta las diferencias en los procedimientos de aplicación nacionales.

### **III. CONTRIBUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA PARA GARANTIZAR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

Para una compañía que opte por operar en un país extranjero es esencial que su capacidad para competir en igualdad de condiciones no se debilite con medidas adoptadas por gobiernos o por empresas. Los principios fundamentales de la OMC garantizan que a esa compañía no se le impedirá hacerlo con medidas gubernamentales discriminatorias. Con las normas sobre competencia se trata

también de lograr que las discriminaciones abusivas de otras empresas no afectarán al funcionamiento normal del mercado, creando así, por ejemplo, obstáculos para entrar en él.

En su comunicación del 5 de marzo de 1998 (WT/WGTCP/W/62), la CE y sus Estados miembros discutieron los efectos sobre el comercio de las prácticas anticompetitivas. Se sugirió que, desde la perspectiva de la OMC, una preocupación especial la constituyen las prácticas anticompetitivas que erigen considerables obstáculos para entrar en un mercado (es decir, el efecto de exclusión) o están destinadas fundamentalmente al comercio de exportación. Esas prácticas niegan a los productores extranjeros la igualdad efectiva de oportunidades de competencia o suponen otra forma de discriminación en el comercio internacional. Por lo tanto, también son particularmente pertinentes para considerarlas en este punto del programa.

En la reunión del Grupo de Trabajo de marzo de 1998 hubo un fructífero debate sobre las repercusiones de las prácticas anticompetitivas en el comercio internacional. Como se señaló en el informe del Grupo de Trabajo, se ofrecieron numerosos ejemplos concretos de prácticas anticompetitivas de empresas que afectan al comercio internacional. También hubo un elevado grado de convergencia sobre un marco para analizar esas prácticas. En nuestra comunicación de marzo de 1998 se dieron varios ejemplos de prácticas anticompetitivas que afectan al comercio internacional, incluido acuerdos horizontales, acuerdos verticales, abuso de una posición dominante y fusiones. Como complemento, deseáramos ofrecer algunos ejemplos adicionales de casos en que se han aplicado el artículo 85 y el artículo 86 del Tratado de la CE a prácticas anticompetitivas que niegan a los productores de otro Estado miembro o de un tercer país la igualdad efectiva de oportunidades de competencia.

Los boicoteos colectivos son un tipo de práctica anticompetitiva contraria al artículo 85 del Tratado. El "Asunto de artículos para barcos"<sup>3</sup> ofrece un ejemplo de la aplicación de la legislación de la CE sobre competencia a tales prácticas.

#### ***Asunto de artículos para barcos***

Los obstáculos erigidos mediante presión de compañías competidoras en relación con el acceso a ciertas instalaciones, que desearía utilizar un fabricante para proporcionar información sobre su producto, pueden constituir una apreciable restricción de la competencia.

La Comisión actuó tras una reclamación presentada por un proveedor británico de artículos para barcos cuando los dos únicos periódicos belgas especializados en esta materia, *Sur l'eau* e *Ik vaar*, que pertenecen al mismo grupo, se negaron seguir haciendo anuncios similares a los publicados en el pasado. Los fabricantes belgas se dirigieron a los periódicos, los cuales alegaron que competían en condiciones de costos y fiscales muy desventajosas.

El proveedor británico se quejó de que sus ventas en Bélgica habían resultado muy afectadas, y también se había privado a los compradores de artículos para barcos en Bélgica del acceso a una fuente más económica y amplia de suministro en otro Estado miembro.

---

<sup>3</sup> Informe de la Comunidad Europea sobre la política de competencia, 1980, página 82.

La discriminación puede ser también una forma de abuso de posición dominante. El artículo 86 del Tratado de la CE es aplicable únicamente a compañías dominantes o a compañías que ocupan colectivamente una posición dominante. Esas compañías operan en un mercado donde la competencia está ya debilitada y donde la discriminación puede utilizarse con éxito como estrategia para disuadir la entrada en el mercado de nuevos competidores o limitar la expansión de los competidores existentes.

Por otro lado, como la discriminación no puede mantenerse a largo plazo en mercados competitivos, esta disposición, salvo en el caso de una posición dominante colectiva, no prohíbe las discriminaciones por una empresa no dominante. En efecto, esa empresa no influye en el precio ni en el producto.

Un tipo de práctica discriminatoria, contrario al artículo 86 del Tratado, es la aplicación por una empresa dominante de condiciones desiguales a transacciones equivalentes. Por lo tanto, la aplicación del artículo 86 puede comprender una evaluación de la naturaleza (composición, calidad, variedad, etc.) y del costo (descuentos por cantidad basados en las economías de costo, costos de envío y de comercialización, etc.) del producto o del servicio de que se trate. Por ejemplo, el artículo 86 no es aplicable cuando la compañía dominante puede justificar costos diferentes para proporcionar determinado producto o servicio.<sup>4</sup> La discriminación se ha utilizado con frecuencia en sectores liberalizados recientemente. El asunto *Deutsche Bahn AG*<sup>5</sup> ofrece un ejemplo de práctica discriminatoria en el transporte por ferrocarril, que repercutió en el comercio.

#### ***Asunto Deutsche Bahn AG***

El Tribunal de Primera Instancia decidió que el operador ferroviario alemán *Deutsche Bahn AG* violó las disposiciones del artículo 86 al abusar de su posición dominante en el mercado de transporte por ferrocarril en Alemania: *Deutsche Bahn* impuso derechos discriminatorios en el mercado del transporte terrestre de contenedores utilizados en el marítimo. Esos derechos eran más altos, por ejemplo, para el transporte entre un puerto belga u holandés y Alemania que entre cualquier lugar de Alemania y un puerto alemán. En otras palabras, *Deutsche Bahn* aplicó condiciones desiguales a transacciones equivalentes, situando así a los puertos no alemanes en desventaja competitiva.

En ciertas circunstancias, la concertación de contratos exclusivos por una empresa dominante puede negar el acceso a un mercado a competidores extranjeros. El asunto *IRI-Nielsen*<sup>6</sup> ofrece un ejemplo interesante, que entraña la discriminación con respecto a un proveedor estadounidense de servicios de información al por menor.

---

<sup>4</sup> Por ejemplo, en el asunto *Corsica Ferries* (ECJ, 18 de junio, asunto C-266/96) la Corte Europea de Justicia declaró que no es incompatible con los artículos 85 y 90 del Tratado incluir en el precio de un servicio de interés económico general un componente destinado a cubrir el costo de mantenimiento de ese servicio, en la medida en que corresponda a los gastos suplementarios ocasionados por las características especiales de ese servicio, y a establecer para ese servicio derechos diferentes sobre la base de las características particulares de cada puerto.

<sup>5</sup> TFI 21 de octubre de 1997, asunto T-229/94.

<sup>6</sup> Informe de la Comisión de la CE sobre la aplicación del Acuerdo CE/Estados Unidos de 1991, de 8 de octubre de 1996 (COM(96) 346), página 5.

***IRI contra Nielsen***

En 1995, la Comisión inició una investigación en virtud del artículo 86 sobre un supuesto abuso de posición dominante por la *AC Nielsen Company*, radicada en Estados Unidos, que es el principal proveedor mundial de servicios de información al por menor con una posición dominante en el mercado de casi todos los Estados miembros. Los servicios de información al por menor consisten en reunir y procesar información sobre ventas de productos y otros datos de comercialización. La investigación de la Comisión se inició a raíz de una reclamación de *Information Resources Inc. (IRI)*, otra compañía radicada en Estados Unidos que, después de introducir nueva tecnología, había conquistado una gran cuota del mercado estadounidense. Las prácticas anticompetitivas abordadas en la investigación de la Comisión comprendían: a) contratos exclusivos en el mercado austríaco que impedían a todo competidor obtener los datos pertinentes y, por lo tanto, entrar en el mercado; b) contratos que impedían a minoristas vender datos a terceros a un precio más favorable que el ofrecido a Nielsen, permitiendo así a Nielsen fijar precios más altos, erigiendo obstáculos para la entrada en el mercado; c) descuentos y rebajas ofrecidas a compañías multinacionales que compraban servicios de Nielsen en varios países. El asunto se resolvió comprometiéndose Nielsen a no concertar contratos exclusivos ni contratos que limitaran de algún modo la libertad de los minoristas para proporcionar datos. También se asumió el compromiso de separar contratos que abarquen más de un país, por lo que los clientes multilaterales pueden pasar a un competidor de un país sin pérdida de las condiciones ofrecidas en otros países, y se prohibieron las rebajas de fidelidad.

#### **IV. POSIBILIDADES DE ESTABLECER EN LA OMC PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA Y SU APLICACIÓN**

La CE y sus Estados miembros han aducido que un importante componente de un marco multilateral de normas sobre la competencia sería el establecimiento de principios esenciales sobre la legislación en materia de competencia y su aplicación. Otros muchos Miembros de la OMC se han mostrado interesados en estudiar más a fondo esa opción. En la presente comunicación se trata de mostrar que existe una estrecha relación entre los principios de transparencia y no discriminación de la OMC y los elementos esenciales de la legislación sobre competencia y su aplicación. Una parte fundamental de la interacción entre el comercio y la política de competencia es la necesidad de fomentar la igualdad efectiva de oportunidades de competencia. Junto con una serie de normas relativas a los obstáculos gubernamentales al comercio, es preciso considerar un marco básico de disciplinas para tratar las prácticas anticompetitivas de las empresas que tienen consecuencias similares para el comercio y la inversión de otros Miembros de la OMC. La mejor manera de lograrlo es mediante el compromiso de introducir una legislación general sobre competencia y una estructura de aplicación efectiva, basada en los principios de transparencia y no discriminación. Esto podría complementarse con planteamientos comunes de las prácticas anticompetitivas que influyen considerablemente en el comercio y en la inversión internacionales y en modalidades de cooperación internacional.

Por lo tanto, en un acuerdo en la OMC podría establecerse un marco básico de normas relativas a la adopción y aplicación de legislación nacional sobre competencia, y disposiciones sobre cooperación entre Miembros de la OMC. No se trataría en absoluto de que la OMC desarrollara facultad alguna de investigación o aplicación sobre prácticas anticompetitivas. Los compromisos asumidos en virtud del marco multilateral se incorporarían en la legislación nacional sobre competencia de los Miembros de la OMC. Por lo tanto, en ese acuerdo no se impondrían obligaciones a las empresas ni resultaría afectada en modo alguno la naturaleza de la OMC como marco de derechos y obligaciones entre sus Miembros. Además, las disciplinas de la OMC deberían tender claramente al objetivo de abordar mejor esas prácticas anticompetitivas que repercuten considerablemente en el comercio y en la inversión internacionales y afectan por lo tanto a los objetivos de apertura de mercados de la OMC. Las prácticas anticompetitivas de carácter puramente

nacional no tiene por qué ser motivo de preocupación en la OMC. Tampoco un marco de normas multilaterales obstaculizaría en modo alguno la aplicación de disciplinas más elaboradas en virtud de leyes sobre competencia de Miembros de la OMC.

Como han mostrado los debates en el Grupo, en general se reconoce que la política de competencia debe considerarse como un instrumento para el desarrollo. En efecto, muchos países en desarrollo han introducido o reforzado un marco jurídico de competencia como elemento esencial de las reformas internas destinadas a fomentar la integración de una economía mundial globalizada. Esto muestra que los países en desarrollo deben participar plenamente en los esfuerzos por reforzar la cooperación internacional sobre política de competencia, y que la dimensión del desarrollo ha de ocupar también un lugar central en las consideraciones de un marco multilateral de normas sobre competencia en la OMC.

En su comunicación sobre el punto 2 del programa de trabajo, la CE y sus Estados miembros compartirán algunas ideas iniciales sobre la manera de disipar las preocupaciones de países en desarrollo en relación con la necesidad de mejorar la cooperación internacional frente a prácticas anticompetitivas. Sin embargo, merece la pena mencionar aquí algunas consideraciones generales. La adopción de una legislación general sobre competencia, basada en una estructura de aplicación efectiva, entraña claros beneficios desde la perspectiva del desarrollo, pero representa también una dificultad para administraciones de países en desarrollo. Los períodos de transición, junto con la flexibilidad de las normas, deben formar parte de todo marco multilateral sobre competencia en la OMC. Ahora bien, para que los países en desarrollo obtengan los máximos beneficios de una mejor cooperación internacional, es preciso examinar más activamente la manera de abordar las necesidades concretas de las administraciones de países en desarrollo. Eso debe implicar el examen en la OMC de dos series de cuestiones complementarias: a) cómo lograr que los países en desarrollo puedan obtener los máximos beneficios de las modalidades de la cooperación internacional, incluidos intercambios de experiencias, intercambios de información no confidencial, consultas, etc.; y b) cómo reforzar la capacidad nacional por lo que respecta a la administración y aplicación de la legislación sobre competencia. La existencia de un marco en la OMC sobre la competencia debería desempeñar una función catalizadora, fomentando una mayor asistencia técnica tendente a objetivos acordados en común. Esto debería entrañar asimismo una mayor cooperación entre la OMC, la UNCTAD, otras organizaciones multilaterales y donantes bilaterales en plena asociación con los países en desarrollo.

Como conclusión de esta comunicación, la CE y sus Estados miembros desean compartir algunas ideas iniciales sobre elementos que pueden considerarse en la OMC con respecto a la elaboración de principios y normas fundamentales sobre legislación en materia de competencia y su aplicación. No se trata de ofrecer una lista completa de principios o de normas, sino más bien de indicar en términos generales algunas de las esferas que podrían abarcar esos principios o normas. Se debe centrar particularmente la atención en aquellos aspectos de la legislación y la política sobre competencia más pertinentes para el sistema comercial multilateral, reconociendo plenamente al mismo tiempo la dimensión del desarrollo y las diferencias en los marcos jurídicos e institucionales nacionales. El principal objetivo sería promover la adopción de una ley general sobre competencia, respaldada por una estructura de aplicación efectiva y basada en principios como transparencia y no discriminación.

A este respecto, la CE y sus Estados miembros sugieren que entre las cuestiones que podrían considerarse más a fondo podrían figurar las siguientes:

a) Adopción de una legislación general sobre competencia: Podría asumirse el compromiso de aplicar una legislación general sobre competencia, sujeta a las apropiadas disposiciones transitorias. Se podría especificar la cobertura básica de esa legislación, en particular en cuanto al tipo de prácticas anticompetitivas abarcadas y la aplicación a empresas privadas y públicas. Se podría confirmar el principio de no discriminación, incluida la discriminación *de jure* y *de facto*. Se podrían elaborar

disposiciones sobre transparencia no sólo relativas al marco jurídico básico, sino también a directrices generales y otros medios de sensibilizar a las empresas y a los consumidores. También se podrían especificar exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia. Asimismo, se podría considerar un compromiso para evitar nuevas exclusiones sectoriales y reducir progresivamente las exclusiones que afectan negativamente al comercio internacional. Igualmente, se podría considerar la aclaración de las relaciones entre políticas reglamentarias y otras formas de intervención gubernamental y la aplicación de la legislación sobre competencia. La intervención de los gobiernos no debería justificar amplias derogaciones de la aplicación de disciplinas de la legislación sobre competencia a las empresas. Se podría reconocer expresamente la función de defensa de las autoridades encargadas de la competencia, a fin de promover la consideración de preocupaciones sobre competencia en relación con políticas de reglamentación u otras formas de intervención gubernamental.

b) Administración y aplicación de la legislación sobre competencia: Un elemento esencial podría ser la creación de una autoridad encargada de la competencia con suficientes facultades de investigación de prácticas anticompetitivas. Las leyes sobre competencia se administrarían en forma no discriminatoria, razonable, imparcial y uniforme. Se podrían elaborar disposiciones sobre transparencia con respecto a diferentes fases en la administración y aplicación de la legislación sobre competencia, incluida la motivación de distintas decisiones razonadas sobre la competencia. Se podrían considerar disposiciones básicas sobre recursos, incluidas sanciones a un nivel suficientemente riguroso para que tenga efectos disuasorios.

c) Derechos de partes privadas: Se podría reconocer procedimientos que permitieran a partes privadas acceder a las autoridades encargadas de la competencia, incluidas peticiones a autoridades administrativas y acceso a los tribunales. También se podría considerar el reconocimiento de las garantías "de proceso legal" en la administración y aplicación de la legislación sobre competencia. Se podrían adoptar asimismo normas básicas sobre la protección de la información confidencial. Se podría reconocer la función del poder judicial en la aplicación de la legislación sobre competencia, incluidos el acceso directo a los tribunales y el examen de decisiones administrativas.

---